



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

Carrera 10 No. 14-33 Piso 6°

cmpl09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

RADICADO: 110014003009-2022-01142-00

Bogotá, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992

Accionante: **HECTOR JULIO ESTUPIÑAN GUEVARA**

Accionado: **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C.**

Providencia: **Fallo**

I. ASUNTO A TRATAR

Una vez agotado el trámite señalado en el Decreto 2591 de 1991, decide este Juzgado, la acción de tutela que, en protección de sus garantías constitucionales presentó **HECTOR JULIO ESTUPIÑAN GUEVARA**, en contra de la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA**.

II. PETICIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

HECTOR JULIO ESTUPIÑAN GUEVARA, solicita el amparo con motivo de la supuesta violación a los derechos fundamentales a la inocencia y al debido proceso, por presunta indebida notificación de los comparendos **Nos. 11001000000027566411, 11001000000034164041, 11001000000030468429, 3267, 3773 y 55.**

Afirmó para sustentar su solicitud de amparo, que no tiene licencia de conducción y no se le notificó en debida forma los mismos.

III. ACTUACIÓN SURTIDA

1.- Recibida la presente queja a través de la oficina de reparto, por auto de 4 de noviembre del año en curso, se dispuso su admisión, y la notificación de la accionada, con el fin de que ejerciera su derecho de defensa. Se vinculó a la **SUBDIRECCION DE GESTION DE COBRO, OFICINAS DE TRANSITO DE CAJICÁ Y COTA – CUNDINAMARCA, DIRECCION DE CONTRAVENCIONES, FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS -SIMIT Y RUT.**

2.- Así, la **SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTA** se opuso a las pretensiones, toda vez que las ordenes de comparendos **11001000000027566411, 11001000000030468429 y 11001000000034164041**, fueron notificadas en VIA y de manera PERSONAL al señor **HECTOR JULIO ESTUPIÑAN GUEVARA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° **80746271**. En tanto se evidencia que la casilla 18 de las órdenes de comparendos se encuentra la firma del presunto infractor.

Por lo que la autoridad de Tránsito conforme a lo establecido en la norma y al no contar con la comparecencia del presunto infractor, en audiencia pública decidió declararlo contraventor de las ordenes de comparendos y por la comisión de las respectivas infracciones de tránsito, mediante las Resoluciones N° 631240 del 10/01/2020, 683270 del 08/13/2021 y 1829232 del 09/13/2022.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 24 de la ley 1383 del 16 de marzo de 2010 y el artículo 205 del Decreto 019 de 2012; evacuado el acervo probatorio y no habiendo más pruebas que practicar, el despacho celebra audiencia efectiva respecto de la responsabilidad contravencional del presunto infractor, emitiendo decisión, la cual una vez notificada en estrados, quedando en firme y debidamente ejecutoriada.

Agregó que las ordenes de comparendos N° 9533599 (Resolución coactivo: 3773) y 99999999000001929190 (Resolución coactivo: 71), corresponden a los Organismos de Transito de Cajicá y Cota - Cundinamarca. Razón por la cual, no es posible que la Secretaría Distrital de Movilidad se pronuncie al respecto, toda vez que la Entidad conoce solamente de las infracciones cometidas dentro del perímetro del Distrito Capital.

3.- **EI RUNT** informó que revisada su base de datos, para la accionante, se encontró que el actor SI aparece con multas e infracciones, así:

NOMBRE COMPLETO:	HECTOR JULIO ESTUPIÑAN GUEVARA		
DOCUMENTO:	C.C. 80746271	ESTADO DE LA PERSONA:	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	Número de inscripción:	10818348
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/07/2010		

Licencia(s) de conducción

\$ Multas e infracciones

TIENE MULTAS O INFRACCIONES: SI

NRO. PAZ Y SALVO:

Al igual que al consultar el SIMIT,

Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago

80746271

Resumen

HEC***JU***

Comparendos: 3

Cédula: 80746271

Multas: 3

Acuerdos de pago: 0

Total: \$ 3.969.112

Estado de cuenta

Guardar estado

Cursos viales

Ver historial (2)

Comparendos y Multas

Mostrar 5

Tipo	Notificación	Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar	
1:001000000027566411	No aplica	PTL15D	Bogotá D.C.	C24...	Pendiente No tiene curso	\$ 438.900	\$ 438.900	
Comparendo Fecha imposición: 04/08/2020								
1:001000000030468419	No aplica	JNK02C	Bogotá D.C.	D08...	Pendiente No tiene curso	\$ 895.800	\$ 895.800	
Comparendo Fecha imposición: 13/07/2021								
1:00100000004164041	No aplica	JIN19K	Bogotá D.C.	C24...	Pendiente No tiene curso	\$ 468.500	\$ 468.500	
Comparendo Fecha imposición: 12/08/2022								
272	No aplica	3D190	CAJICA - DEPT CUNDINAMARCA	1...	Cobro coactivo	\$ 257.500 interes \$ 702.680	\$ 992.910	
Multa Fecha coactivo: 29/10/2010								
21	No aplica	OP095C	Cota YÍA NACIONAL	C24...	Cobro coactivo	\$ 322.170 interes \$ 329.513	\$ 683.925	
Multa Fecha coactivo: 23/05/2015								

Mostrando 1 de 2

Anterior12Siguiente

Total (6): \$ 3.969.112

4.- La **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – SIMIT** dijo que revisó el estado de cuenta del accionante No. 80746271 y se encontró que tiene reportada la siguiente información

Liquidación												
Tipo de Documento:		Cédula					No. Documento:		80746271			
Resoluciones												
	Resolu	Fecha Resolu	Comparando	Fecha Comparando	Secretaría	Nombre Instructor	Estado	Infracción	Valor Multa	Infracciones Adicionales	Valor Adicional	Valor A Pagar

[illegible]

IV. PROBLEMA JURÍDICO

Teniendo en cuenta los hechos dispuestos en el escrito de tutela, el problema jurídico se circunscribe a determinar si la entidad accionada, vulnera los derechos fundamentales a un debido proceso y presunción de inocencia, por indebida notificación de comparendos impuestos a su nombre.

V. CONSIDERACIONES

- 1.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 37 del Decreto 2591 de 1991 y en el num. 1º del art. 1º del Decreto 1382 de 2000, este Juzgado es competente para conocer de la presente acción de tutela.
- 2.- La acción de tutela es una herramienta con la que se busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acción u omisión de las autoridades públicas o aún de los particulares, en los casos establecidos por la ley.
- 3.- Así, se encuentra que la exigencia del petitum es que se ordene a la accionada decrete la nulidad de comparendos impuestos a su nombre.
- 4.- De cara a los derechos fundamentales que a juicio del accionante han sido conculcados por las entidades accionadas, es pertinente traer a colación, lo esbozado por la Honorable Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, pues, la acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando los mismos resulten vulnerados por la acción u omisión de las autoridades, y no se cuente con otro mecanismo judicial para su salvaguarda.

Por esta razón, la finalidad última de esta acción constitucional es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que se configure la amenaza que sobre él se cierne.

En punto de determinar la procedencia de la acción de tutela, la jurisprudencia ha sido reiterativa en cuanto a su carácter residual y subsidiario, dado que el sistema judicial prevé diversos mecanismos de defensa ordinarios a los que pueden acudir las personas para la protección de sus derechos. En este sentido, el juez de tutela debe observar, con estrictez, cada caso concreto y determinar la existencia o no de otro medio judicial que sea idóneo para proteger el derecho amenazado; sin embargo, será procedente de manera transitoria ante la existencia de un perjuicio irremediable.

Téngase en cuenta que el requisito de la subsidiariedad tiene una connotación particular cuando se trata de controversias relativas al derecho al trabajo, dado que en estos casos la acción de tutela, en principio, no es el mecanismo adecuado para debatirlas pues “el ordenamiento jurídico colombiano prevé para el efecto acciones judiciales específicas cuyo conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo contencioso administrativo, según la forma de vinculación de que se trate, y afirmar lo contrario sería desnaturalizar la acción de tutela, concretamente su carácter subsidiario y residual” (C. Const. Sent. T-663/11). No obstante, puede ser procedente cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (Sent. T-347/16, ib.), ante la existencia de “una (...) una situación de debilidad manifiesta, con la capacidad necesaria de impactar en la realización de sus derechos al mínimo vital o a la vida digna. En este escenario, la situación particular que rodea al peticionario impide que la controversia sea resuelta por las vías ordinarias, requiriendo de la procedencia de la acción de tutela, ya sea para brindar un amparo integral o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en su contra.” (Se subraya, ib.).

En cuanto a la cualificación de los hechos que configuran la inminencia de un perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha contemplado que ese perjuicio (i) debe ser inminente; (ii) debe requerir de medidas urgentes para ser conjurado; (iii) debe tratarse de un perjuicio grave; y (iv) solo puede ser evitado a partir de la implementación de acciones impostergables. La caracterización de estas condiciones fue planteada por la Corte desde la sentencia T-225/93 y se ha mantenido de forma invariable en la jurisprudencia posterior. Las reglas fijadas sobre el particular son las siguientes:

6.1. El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.

6.2. Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia.

6.3. No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La

gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.

6.4. La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, esta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social. (C. Const. 956/13).

Bajo los supuestos jurisprudenciales señalados, la Corte ha contemplado que se presente un daño irreparable, inaplazable, que requiera estrictamente de soluciones inmediatas y urgentes, que se necesiten acciones ipso facto. Es decir, que se compruebe realmente que la persona que invoca la acción no tiene otra forma de combatir esa amenaza la cual debe ser realmente efectiva y real.

VI. CASO CONCRETO

Descendiendo al caso objeto de estudio, es preciso abordarlo con miramiento en la situación planteada por **HECTOR JULIO ESTUPIÑAN GUEVARA**, quien pretende que por medio de la acción de tutela se ordene a la accionada, decrete la nulidad de comparendos impuestos a su nombre.

Sea el momento oportuno para señalar que no se demostró que lo pretendido por la accionante sea indispensable para evitar un perjuicio irremediable frente a una amenaza inminente de gran intensidad que requiera de medidas de protección urgentes e impostergables para el restablecimiento integral de sus derechos y que tornen en ineficaces los mecanismos ordinarios para su defensa.

Además, la parte accionante tiene a su disposición otros mecanismos ordinarios de defensa judicial, idóneo y eficaces para la protección de sus derechos, pues los medios de control ordinarios son verdaderas herramientas de protección dispuestas en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe acudir oportunamente si no se pretende evitar algún perjuicio irremediable

Recuérdese que este amparo no puede ser considerado como una vía alternativa, adicional o complementaria de las acciones judiciales, máxime si no se acreditó que se presentara un perjuicio irremediable para garantizar la protección de los derechos invocados por la demandante.

VII. DECISIÓN

En virtud de lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley.

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por **HECTOR JULIO ESTUPIÑAN GUEVARA**, por improcedente por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la decisión adoptada a las partes, por el medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase inmediatamente el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. Oficiese.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,



LUZ DARY HERNÁNDEZ GUAYAMBUCO
Juez